

## EN ESTA EDICIÓN

- 1 Clima favorable en Polonia
- 3 Lamy descarta reunión ministerial para este año
- 4 Unión Europea extiende SGP+ pero avanza poco en negociación con Centroamérica
- 5 XVI Cumbre APEC centrada en crisis internacional y futuros TLC
- 7 Falló la política Bush-Schwab en el APC con Colombia  
Steve Charnovitz
- 8 Los biocombustibles y el derecho de la OMC  
Juan Pablo Arístegui
- 11 El conocimiento tradicional y los TLC, lecciones de Costa Rica  
Jorge Cabrera Medaglia
- 13 La OPS ante el desafío de la salud, la innovación y la propiedad intelectual  
Jaume Vidal
- 15 ICTSD al día
- 16 Eventos y publicaciones

## Clima favorable en Polonia

A pesar de las tímidas expectativas sobre el resultado de la conferencia sobre cambio climático en Poznan, Polonia, los ministros lograron algunos progresos respecto al Fondo de las Naciones Unidas para la Adaptación, así como en materia de transferencia de tecnología.

“Poznan es el punto a mitad del camino entre Bali y Copenhague. Representa un momento importante para hacer un balance, pero también requiere hacer avanzar urgentemente las negociaciones bajo el Plan de Acción de Bali, así como el trabajo continuo”, fueron las palabras de Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), sobre la esencia de la conferencia, que en su décimo cuarta edición reunió a 189 países del 1º al 12 de diciembre.

Pero los pocos compromisos, la poca afluencia de la delegación del presidente electo de EE.UU., Barack Obama, y la incertidumbre económica generalizada, hace pensar a los ambientalistas que pasos significativos hacia

un régimen internacional sucesor del Protocolo de Kioto, todavía están lejos.

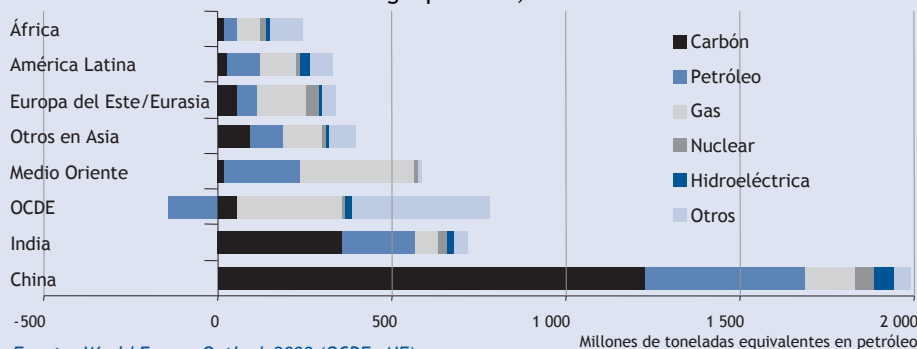
### Fondo de Adaptación

Uno de los acuerdos conseguidos en Poznan fue sobre el Fondo de Adaptación, el cual tiene como objetivo proteger a los países en desarrollo de los posibles impactos del cambio climático. Los fondos en general provienen del dos por ciento acumulado del mecanismo para un desarrollo limpio (CDM, por sus siglas en inglés) -un mecanismo del Protocolo de Kioto que permite a los países industrializados recibir crédito al invertir en proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo-, así como de las contribuciones voluntarias.

### ¿Sabía Ud.?

El aumento en la demanda de energía por parte de China para 2030 – como resultado del tamaño de su mercado y de sus perspectivas de crecimiento económico – empuja a la del resto de los países y regiones.

Incremento de la demanda de energía primaria, 2006-2030



Fuente: World Energy Outlook 2008 (OCDE, AIE).



International Centre for Trade and Sustainable Development



## Estimado lector,

El final de año se acerca y las novedades en materia de comercio y desarrollo sostenible son variadas. El calentamiento global estuvo presente en el mes de diciembre, pues la ciudad de Poznan, Polonia fue la sede de la cumbre mundial sobre cambio climático. En este número aprovechamos para examinar cuáles fueron los resultados que podrían allanar el camino hacia la era post-Kioto.

A su vez, como no podía ser de otra manera, la OMC generó muchas expectativas ante una posible reunión ministerial en Ginebra. Finalmente, su Director, Pascal Lamy, no logró el consenso necesario para convocar a los ministros, y una vez más se escapó la oportunidad de liberalizar el comercio y posiblemente favorecer al desarrollo.

En el ámbito regional, las conversaciones entre la UE y los centroamericanos no dieron los frutos esperados y se volvieron a mostrar muy ligadas a un eventual resultado en la OMC. No obstante, el bloque europeo decidió renovar el SGP+ a los países latinoamericanos por 3 años más.

La Cumbre APEC fue otro de los grandes foros de negociación comercial que intentó abordar la cuestión de la crisis económica y buscar alternativas para palear dicha situación. La reunión también fue el escenario para finalizar la negociación de un acuerdo comercial entre Perú y China.

En la sección comentarios, el número de diciembre cuenta con el análisis de Steve Charnovitz sobre el fracaso de la política de George Bush respecto al APC con Colombia. Juan Pablo Aristegui plantea de qué manera la OMC podría contribuir a mejorar el debate sobre el comercio de biocombustibles, y Jorge Cabrera nos presenta la experiencia costarricense sobre la relación existente entre los TLC y la biodiversidad. Para finalizar, Jaume Vidal nos muestra las principales líneas de trabajo de la OPS para hacer frente a la problemática generada por la poca innovación en el campo farmacéutico y la falta de acceso a la salud en los países en desarrollo.

De esta manera, concluimos la edición 2008 de Puentes, y nos preparamos para recibirlos con renovados esfuerzos en 2009.

¡Que pasen unas felices fiestas!

Cordialmente,

El equipo de Puentes

Los países en desarrollo estaban descontentos con el presupuesto proyectado por el Banco Mundial de cara a Poznan, por lo que presentaron una propuesta que finalmente les brindará acceso a un fondo de USD 80 millones, a partir de 2009. Pero a pesar de este avance, algunos observadores consideran que los gobiernos pudieron haber destinado más recursos al citado Fondo, pues las necesidades para adaptarse al cambio climático, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, ascienden a USD 86 mil millones por año. En tal sentido, se espera que en el marco de la conferencia de Copenhague se destine más presupuesto para esos fines.

## Transferencia de tecnología y el Programa Estratégico de Poznan

Un tema que ha probado ser muy importante pero a la vez controversial en el contexto de las negociaciones sobre cambio climático, es la promoción del desarrollo y de la transferencia de tecnología. En efecto, abordar cuestiones sobre este fenómeno evidentemente requerirá de innovación tecnológica y de la rápida transferencia de tecnologías limpias a los países en desarrollo.

El trabajo en esta temática parte del artículo 4.5 del UNFCCC, que refleja el principio general de ‘responsabilidad común pero diferenciada’ de estas negociaciones, y que dispone que los países desarrollados deben tomar “todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos”, a los países en desarrollo.

El Plan de Acción Bali, que delinea el curso de las actuales negociaciones sobre cambio climático, llama a considerar posibles medidas, como remover obstáculos y otorgar incentivos para que los países en desarrollo puedan generar y transferir tecnología, así como a cooperar en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

En Poznan, los ministros acordaron un “Programa Estratégico” que permitiría aumentar los niveles de inversión en materia de transferencia de tecnología para ayudar a los países en desarrollo a satisfacer sus necesidades tecnológicas para mitigar y adaptarse a los fenómenos del clima. La falta de precisión sobre el financiamiento de este programa preocupa a grupos ambientalistas, por lo que Copenhague será clave para dilucidar esta cuestión. El Grupo de los 77 países en desarrollo más China (G77) había dado a conocer una propuesta que aboga por la aportación de los países industrializados del uno por ciento de su producto interno bruto (PIB).

Los países en desarrollo son de la idea de que el mundo industrializado, en particular EE.UU., debe tomar el liderazgo y comprometerse a intensificar las reducciones de sus emisiones y promover la asistencia técnica y financiera, antes de esperar compromisos de los países pobres. Por el contrario, los países ricos optan por la colaboración debido a que son las empresas las que finalmente son las responsables del desarrollo y la diseminación de la tecnología de acuerdo con ellos.

## ¿“Visión compartida”?

Países en desarrollo y desarrollados parecen no compartir una visión sobre hacia dónde dirigir sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Mientras los países del ‘primer mundo’ quieren enfocarse en metas de mediano y largo plazo para 2020 y 2050, los países en desarrollo insisten en que primero hay que demostrar la implementación del Protocolo de Kioto, e imprimir un verdadero sentido de compromiso para reducir las emisiones en un 40 por ciento hacia 2050.

La columna vertebral de estas negociaciones, el principio de ‘responsabilidad común pero diferenciada’ también fue objeto de discusión y de diferentes puntos de vista en Poznan. La delegación estadounidense una vez más dejó en claro que aunque reconocen ese principio, quieren que países como China comiencen a asumir obligaciones.

En donde sí hay consenso entre los negociadores es en convenir una reunión preparatoria de alto nivel en septiembre, antes de Copenhague. Al respecto y teniendo en cuenta Poznan, Andy Atkins, Director Ejecutivo de *Friends of the Earth*, advirtió que “ahora hay un plan para tomar decisiones en 2009 pero se requiere urgentemente acelerar el paso”, refiriéndose a que las decisiones importantes son las que finalmente cuentan para nuestro planeta.

# Lamy descarta reunión ministerial para este año

El Director General de la OMC, Pascal Lamy, anunció el viernes 12 de diciembre que las negociaciones comerciales de la Ronda Doha no iban a culminar a finales de este año, siendo este el segundo gran revés de 2008.

Los negociadores no lograron acortar la brecha existente, particularmente en las discusiones sobre acuerdos sectoriales (iniciativas de liberalización en sectores específicos de bienes industriales que han sido fuertemente impulsadas por EE.UU.) y el mecanismo de salvaguardia agrícola. Dirigiéndose a los Miembros de la OMC, Lamy expresó dicho viernes que no había podido “detectar la voluntad política de sus interlocutores para realizar los movimientos que darían el último impulso para establecer modalidades en esos dos temas”. Según Lamy, no hubo la facilidad para “utilizar el capital político necesario para sacar [adelante] las modalidades” de negociación.

## Gran complicación en sectoriales

A pesar de que el mandato de negociación para el acceso a mercados no industriales menciona expresamente que la participación en las 14 iniciativas sectoriales es voluntaria, los EE.UU. dejaron en claro que para su consideración, Brasil, China e India deberían participar al menos en dos de ellas. Los países en desarrollo, por su parte, consideran que esa postura es inaceptable.

Pascal Lamy asoció esa situación de que algunos países ven a las sectoriales como un ‘bonus’, como una incorporación que no es obligatoria al paquete principal, como “la cereza en la torta”. Para otros, se trata de una parte esencial del acuerdo, el cual sólo podría ser finalizado si existe la garantía de compromisos, “sería la torta en la cereza”. Sobre este punto, dijo que las dos posiciones fueron “irreconciliables”, agregando que sería útil “si pudiéramos obtener una mejor apreciación del valor de lo que está en la mesa, [y cuánto representa la cuestión de las sectoriales].”

Lamy también remarcó que prevalecieron algunas diferencias clave en el mecanismo de salvaguardia especial (MSE). Este último está pensado para ayudar a los países en desarrollo a proteger a sus agricultores de los aumentos repentinos de las importaciones y de la caída inesperada de los precios.

A pesar de todo, insistió en que fue la falta de voluntad política más que la falta de soluciones técnicas, evitó que se alcanzara un acuerdo en el MSE y en las iniciativas sectoriales.

## Cambio repentino de ánimos

Las esperanzas para concluir un acuerdo, como es sabido, se toparon con el fracaso de la reunión mini-ministerial organizada en julio de este año. No obstante, los ánimos subieron en octubre debido a la aparente disposición política de sellar un acuerdo con la llegada de la crisis económica

internacional. A tal respecto, los mandatos emanados de las cumbres del G-20 y de la APEC sumaron mayor impulso para un eventual acuerdo.

Pero los ánimos en la OMC cambiaron rápidamente, sobre todo cuando durante las primeras semanas de diciembre comenzó a vislumbrarse que los pedidos políticos para concluir un acuerdo de modalidades, no lograban traducirse en cambios de posición en la mesa de negociaciones.

“Ha habido un cambio radical y repentino en los ánimos de [los negociadores en] la OMC”, dijo el Embajador Trevor Clarke de Barbados en un seminario que se llevó a cabo en Ginebra el 11 de diciembre. Clarke atribuyó este cambio de actitud a las recientes cartas enviadas por los congresistas de los EE.UU. y por los grupos que representan a la industria de ese país, en donde se le solicitaba al presidente Bush que no sellara un acuerdo que no garantizase suficientes ganancias en materia de acceso a mercado para bienes agrícolas e industriales. Algunos culparon a los EE.UU. por ‘subir la apuesta’ en las negociaciones de las iniciativas sectoriales.

## Próximos pasos

En su declaración frente a los negociadores, Lamy dijo que no era viable pensar en una ministerial para este año. Prometió que iba a continuar dialogando con las delegaciones e hizo hincapié en “ver cómo reunimos la energía política necesaria para el año próximo”. No obstante, nadie espera soluciones mágicas, y muchos temen que el ‘impulso político’ se haya perdido para siempre a causa de los continuos impasses y del empeoramiento de la economía global. Otra gran incógnita es saber qué prioridad le darán los nuevos gobiernos de Washington, Nueva Delhi y Bruselas a la conclusión de la Ronda Doha.

Al momento del cierre de esta edición, se dio a conocer que los Miembros de la OMC tendrían la oportunidad de expresar sus reacciones, y posiblemente frustraciones, durante una reunión formal del Comité de Negociaciones Comerciales, que se llevaría a cabo el miércoles 17 de diciembre.

*“No hubo la facilidad para utilizar el capital político necesario para sacar [adelante] las modalidades de negociación”.*

# Unión Europea extiende SGP+ pero avanza poco en negociación con Centroamérica

Las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea (UE) y América Latina (AL) registraron algunos avances este mes. Por un lado, la UE extendió hasta 2011 las preferencias comerciales unilaterales a casi todos los países de AL, y por otro, mostró un leve avance en el Acuerdo de Asociación con Centroamérica.

Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela son los países de AL que gozarán, por tres años más, de acceso preferencial al mercado europeo bajo el régimen especial de estímulo al desarrollo sostenible y la buena gobernanza (SGP+). Dicho régimen ofrece rebajas arancelarias adicionales al Sistema General de Preferencias para productos como el tabaco (recorte de hasta un 52 %), varios jugos de frutas (hasta un 30 %), las frutas (hasta un 20 %), las verduras (hasta un 14 %), el pescado (hasta un 20 %) y la miel (hasta un 17 %).

## Colombia, El Salvador y Panamá en aprietos

Dado que para poder ser beneficiario del SGP+ es necesario ser un país en desarrollo considerado “vulnerable”, y además cada país debe mostrar la ratificación y aplicación efectiva de 27 convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, protección al medio ambiente, combate al narcotráfico y la corrupción, no todos los países tienen los beneficios garantizados. En el caso de El Salvador y Sri Lanka, la UE ha expresado dudas sobre el grado de aplicación efectiva de algunos convenios de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, la Comisión Europea inició investigaciones con el fin de asegurarse de que ambos países cumplen con las condiciones establecidas para seguir beneficiándose del SGP+. La Comisión ha manifestado que en caso de demostrarse lo contrario, el régimen “podría” serles retirado.

A pesar de que el otorgamiento del SGP+ a Colombia había sido fuertemente cuestionado por diversas organizaciones civiles, finalmente sí va a beneficiarse del Sistema. Días antes del anuncio de los países beneficiarios del SGP+, el Director General de comercio de la Comisión Europea, David O’Sullivan, aceptó haber recibido varias denuncias respecto a la conveniencia de extender el SGP+ a Colombia. La noticia de la extensión del SGP+, aunada a aquella sobre la negociación bilateral de un Acuerdo de Asociación entre la UE y Colombia, han generado fuertes críticas por parte de diversas organizaciones laborales locales y de derechos humanos europeas. Éstas han manifestado que la UE ha estado “sistemáticamente desinformada” sobre la situación laboral y de derechos humanos en el país andino<sup>1</sup>.

Panamá presenta un caso particular, pues a pesar de haber sido beneficiario del SGP+ en el periodo anterior, no logró documentar a tiempo el cumplimiento de los acuerdos requeridos para seguir en el programa de la Comisión Europea. Según el nuevo Reglamento SGP, Panamá tendrá nuevamente la posibilidad de presentar su solicitud hacia la mitad del

periodo cubierto por el Reglamento SPG 2009-2011, es decir, hasta mediados de 2010. Se ha dicho que la exclusión del SGP+ es consecuencia de que las autoridades panameñas olvidaron solicitar la renovación<sup>2</sup>, por lo que el Ministerio de Comercio propuso crear el “euro bono”. Este plan compensaría con fondos públicos los aranceles que tendrán que pagar los exportadores panameños, quienes en principio han rechazado la propuesta.

## Negociación con Centroamérica esperaba resultado de la OMC

La que se calculaba que fuera una ronda positiva y de avances en gran parte de los temas sensibles del pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AdA) entre Centroamérica (CA) y la Unión Europea, se vio afectada por la falta de acuerdo en las negociaciones multilaterales bajo la Ronda Doha. El anuncio de que nuevamente se intentaría culminar un acuerdo en la OMC este diciembre, provocó que la Reunión Técnica Comercial, celebrada del 8 al 12 de diciembre en Bruselas, no culminara las negociaciones en ninguno de los productos importantes para CA, como azúcar, banano y carnes.

Así las cosas, la Reunión Técnica Comercial en materia de acceso a mercados se limitó a que cada parte presentara las listas de solicitudes de mejora, iniciando así la negociación de producto por producto. CA incluyó en su propuesta de mejora de acceso, al banano, la carne de bovino, algunas hortalizas, azúcar, productos con alto contenido de azúcar y jugos y concentrados de frutas, entre otros. Además hubo cierto progreso en la parte normativa del AdA, y oficiales centroamericanos destacaron el hecho de que el grupo de Aduanas y Facilitación del Comercio finalizó el Protocolo de Asistencia Mutua en Aduanas, y que el Capítulo de Solución de Controversias quedó prácticamente finiquitado.

Negociadores de la región y representantes del sector productivo coincidieron en afirmar su interés en obtener un acceso mejorado al mercado europeo en comparación con el que tendrían los Miembros de la OMC. Por esto, delegados europeos manifestaron que enero será un mes clave y que ambas regiones reconocieron su voluntad de terminar las negociaciones en marzo durante la ronda de Tegucigalpa, Honduras, dos rondas antes de lo previsto<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cronin, D. (2008). Colombia Given a Trade Lease. *Inter Press Service*.

<sup>2</sup> Gobierno propondrá crear un “euro bono” para afrontar pérdida del SGP. (2008, 13 de diciembre). *EFEKOM*.

<sup>3</sup> González Sandoval, G. (2008, 15 de diciembre). Enero: Al fin negociarán sensibles. *El Financiero*.



# XVI Cumbre APEC centrada en crisis internacional y futuros TLC

En la recientemente concluida cumbre de APEC, los líderes reconocieron que la “actual crisis financiera mundial es uno de los retos económicos más serios que hayamos enfrentado alguna vez”<sup>1</sup>, y propusieron medidas con la esperanza de poder superarla “en un periodo de dieciocho meses”. La reunión sirvió además para avanzar varios acuerdos comerciales.

Durante la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la crisis global, que hasta ese entonces era mayormente financiera y ahora ha adquirido dimensiones económicas, acaparó la mayor parte de las discusiones y declaraciones oficiales. De hecho, los líderes asistentes modificaron la agenda de la Cumbre, celebrada del 22 al 23 de noviembre pasados en Lima, para incluir una declaración adicional respecto a este tema en particular.

La “Declaración de los Líderes de APEC sobre la Economía Global” esboza una serie de recomendaciones y compromisos concretos en el área financiera y comercial. Destacan dentro de las propuestas “la importancia de la reforma al sector financiero”, “el estímulo monetario y fiscal”, la necesidad de “reformular integralmente las instituciones financieras internacionales” y el apoyo a los regímenes sin restricciones al comercio y la inversión.

La “Declaración de Lima” también se refirió a otros temas, como la necesidad de “abordar la dimensión social de la globalización” e hizo un reconocimiento - marginal para algunos - de la importancia de otras crisis como la alimentaria y la climática. En el primer caso, planteó la relevancia de la seguridad alimentaria, y consideró que una conclusión “pronta, ambiciosa y balanceada” de las negociaciones de la Ronda Doha contribuiría a este cometido, pues traería consigo mejoras sustanciales en el acceso al mercado y reduciría las medidas que distorsionan el mercado en el comercio agrícola global. Sobre el calentamiento global, los líderes planearon algunas iniciativas regionales, así como tratar el problema a través de la cooperación internacional dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

## Integración de APEC

En coincidencia con las metas de Bogor de 1994 - según las cuales las economías del Foro trabajarían para conformar una zona de libre comercio Asia-Pacífico hacia 2010 para el caso de las economías industrializadas, y 2020 para los países en desarrollo - la XVI Cumbre avanzó en medidas regionales y bilaterales con tal fin. En cuanto a las primeras, se destaca el impulso al segundo Plan de Acción de Facilitación del Comercio, así como al de Facilitación de la Inversión. Se elaboró además un conjunto de medidas modelo para que los acuerdos comerciales preferenciales que lleven a cabo los países Miembros tengan mayor consistencia y coherencia. Respecto a los planes de asociación comercial bilateral, la

pasada Cumbre evidenció la inclinación por los tratados de libre comercio (TLC). Se estima que actualmente la mitad del comercio dentro del Foro se beneficia de preferencias comerciales bajo acuerdos comerciales entre sus miembros, y que cuando todos los tratados todavía en negociación culminen, cerca de dos tercios del comercio de APEC contará con algún tipo de preferencia comercial<sup>2</sup>. Es así como el anfitrión, Perú, anunció la pronta negociación de tratados comerciales con Corea del Sur y Japón, y días después finalizó la negociación con China. Mientras tanto, el Canciller de Chile, Alejandro Foxley, manifestó que Perú, EE.UU. y Australia se habían unido al subgrupo llamado P-4 (formado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur), y que habían decidido iniciar conversaciones en marzo de 2009 con la intención de crear un área de libre comercio<sup>3</sup>.

## TLC China - Perú: culminado pero criticado

Sin duda alguna China es uno de los socios comerciales más atractivos para América Latina y el Caribe. Con una población superior a los 1,300 millones, la economía creciendo cerca del 10% por año en las últimas décadas, un apetito voraz por importaciones de alimentos y materias primas, exportaciones de manufacturas sumamente competitivas, y escasas concesiones comerciales unilaterales, China ha capturado la atención de las oficinas comerciales del mundo.

Con ese panorama de fondo, China y Perú lograron concluir sus negociaciones para un TLC en seis rondas, una más de las previstas y varias conferencias a distancia entre los equipos negociadores, algunas de las cuales exigieron la propia intervención del presidente del Perú, Alan García. Al proceso se le criticó la premura y lo que parecía un exceso de ansiedad por parte del gobierno peruano por anunciar la firma del acuerdo durante la Cumbre APEC.

Finalmente, los negociadores del Perú se congratularon de haber logrado un TLC “mejor que el que Chile logró con China”, al excluir un 10% de las partidas consideradas sensibles para la nación andina de toda liberalización, y lograr mayor acceso para los bienes agrícolas que aquel que China quería otorgar en un principio. Algunos observadores han acotado que el Perú terminó cediendo en ambos temas.

Las muestras de alegría no han sido unívocas en el Perú, donde algunos sectores temen verse perjudicados. La Unión de Empresarios Textiles por ejemplo, criticó la falta de transparencia en el proceso que, a juicio de su presidente Pedro Manzur, fue manejado como un “secreto de Estado”.

## Oportunidades y riesgos

La promesa de ingresar a un mercado que ofrece infinitas oportunidades por el número mágico de 1.300 millones de potenciales consumidores, no apacigua los temores de varios sectores industriales. Algunos son el textil, el de manufacturas y el de metalmecánica, que habrán de competir con productos favorecidos por los altos subsidios y otros incentivos que el gobierno de China brinda a sus productores.

*“China y Perú lograron concluir sus negociaciones para un TLC en seis rondas, una más de las previstas”.*

Sin embargo, esa es sólo una de las ventajas contra las que habrán de competir los peruanos. Otros temas de mayor preocupación son la abierta violación de China a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y a las distintas regulaciones ambientales, lo cual sumado a los subsidios

gubernamentales, dan como resultado unos bajísimos costos de producción imposibles de emular y menos de superar por el Perú. El columnista Humberto Campodónico resumió sus percepciones de la siguiente manera: “Los chinos defienden a morir sus productos, pero nosotros nos liberalizamos sin que nadie nos lo pida”.

Pero la imposibilidad de competir con China no lo es solamente para los productores propiamente peruanos, sino también para los regionales. Los países típicamente abastecedores del Perú podrán ver sus exportaciones a ese país seriamente perjudicadas por no tener capacidad alguna de igualar la oferta china de precios.

China llegó a convertirse en el segundo destino de las exportaciones peruanas y el gobierno ha adelantado que fácilmente llegará a ocupar el primer lugar que actualmente ostentan los EE.UU. Según datos de la Cámara de Comercio Peruano-China, las exportaciones pasaron, desde el año 2001, de USD 425 millones a USD 3036 millones en 2007. En ese mismo lapso, las importaciones se incrementaron de USD 322 millones a USD 2251 millones. Para el 2015 el Presidente García vislumbra un aumento a USD 20 mil millones para las exportaciones y a no menos de USD 12 mil millones para las importaciones. Los sectores de más importancia en las exportaciones del Perú han sido el minero (minerales de cobre, plomo, zinc y hierro), el pesquero (harinas de pescado), y el petrolero. Mientras tanto, importa desde China primordialmente productos de alta tecnología.

Para el Perú las oportunidades son tan grandes como las potenciales dificultades. Su gobierno asegura que los distintos sectores tienen tiempo para adaptarse y competir.

## La creciente importancia de APEC

Las reuniones del APEC han tomado relevancia para el mundo y en especial para América Latina no sólo por su dimensión económica sino también por su potencial. Según cifras recientes, las 21 economías del Foro representan el 41% de la población mundial, generan más del 55% de la producción

global (en paridad del poder adquisitivo), cerca del 47% de las importaciones mundiales de bienes, y casi el 40% del comercio mundial de servicios.

Pero además, en tiempos de crisis económica internacional y recesión en la mayor economía del mundo, muchas de las esperanzas para afrontar esta coyuntura están puestas en las grandes economías emergentes pues son las que avanzan más rápido y a quienes se atribuye la mayor parte del crecimiento mundial. Entre 1990 y 2006 el comercio entre los países en desarrollo creció a una tasa anual media (10.7%) superior a la del comercio global (8.1%). Dentro de estas economías, las asiáticas representaron dos terceras partes del comercio Sur-Sur. Si bien Asia contiene socios más relevantes para algunos países latinoamericanos, éstos representan una ventaja marginal para los asiáticos. Entre 2004 y 2006 las importaciones hacia Asia-Pacífico provenientes de Latinoamérica fueron únicamente del 2,7% del total.

Un informe de la CEPAL<sup>4</sup> aprecia que los países que conforman la región Asia-Pacífico siguen siendo “un mercado sin explotar para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe”. No obstante, algunos países del área han estado aprovechando el dinamismo de la demanda de importaciones de Asia-Pacífico. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú, son algunos para los que dicha región es el principal o uno de los destinos más relevantes para sus exportaciones, concentradas mayormente en unos pocos productos primarios como cobre, soja, hierro, petróleo, zinc, entre otros. Para estos países, el reto consiste en fomentar el desarrollo del comercio intra-industrial (importación y exportación de productos similares pero no idénticos), diversificando sus exportaciones y agregando más valor a las existentes.

El año 2010 será una fecha crucial pues expirará la moratoria que actualmente mantiene el APEC para la adhesión de nuevos miembros. Recordemos que Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá ya han externado su deseo de formar parte del Foro. Costa Rica incluso ha dado pasos en esta línea al anunciar recientemente las negociaciones para un TLC con China y otro con Singapur.

Finalmente, debe decirse que los países de Asia-Pacífico son los mayores tenedores de reservas internacionales, con un 60 por ciento del total mundial y 53 por ciento de los Títulos del Tesoro de los EE.UU. Esta situación les ha llevado a tener una participación creciente en las corrientes mundiales de inversión, a la vez que América Latina ha visto caer su participación mundial como destino de inversión extranjera directa (IED). Analistas han sugerido que más inversión podría utilizarse para mejorar la deficiente infraestructura de la región. Le corresponderá a las empresas y gobiernos latinoamericanos ofrecer una gama atractiva de proyectos para capturar mayores flujos de IED y así generar mayores ingresos y empleo.

<sup>1</sup> Foro Económico Asia-Pacífico. (2008a). Declaración de Lima. Lima

<sup>2</sup> CEPAL. (2008). Oportunidades de comercio e inversión entre América Latina y Asia-Pacífico: El vínculo con APEC. Santiago.

<sup>3</sup> Lizarzaburu, J. (2008, 22 de noviembre). Cumbre APEC: La fiebre de los TLC. BBC Mundo.

<sup>4</sup> Op. Cit. 2.

# Falló la política Bush-Schwab en el APC con Colombia

Steve Charnovitz\*

El reciente receso del Congreso dio su veredicto respecto a la estrategia de la Administración Bush para asegurar la promulgación del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Colombia. El veredicto es que la estrategia poco cooperadora del Presidente Bush y de la Representante Comercial de los EE.UU., Susan Schwab, falló estrepitosamente.

A modo de reseña, recordemos que el 7 de abril de 2008 la Administración Bush le envió al Congreso un proyecto para implementar el APC, pero sin contar con el visto bueno de los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado. A pesar de que el Presidente tiene la potestad de hacer esto, la práctica desde 1979 indica que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de ley al Congreso una vez que los Comités de ambas Cámaras traten el mismo en las sesiones “non-markup”. En esas sesiones se discute el tema, pero no pueden hacerse modificaciones al proyecto.

Pero como sucedió con muchas costumbres legislativas ya establecidas, durante la Administración Bush ésta tampoco fue respetada. El Ejecutivo entonces envió su proyecto de ley al Congreso, pero a modo de que lo tomara o lo rechazara. La Embajadora Schwab justificó el accionar de la Administración argumentando que debido a los pocos ‘días legislativos’ que quedaban hasta el receso, según sus estimaciones previsto para septiembre, la Administración se vio obligada a enviar el proyecto de ley ese mismo día para asegurar que se tratara durante el presente año legislativo. Tal vez si la Administración hubiera manejado mejor la información respecto a cuándo el Congreso iba a entrar en receso, dicha acción unilateral del 7 de abril no hubiera ocurrido.

La reacción del Congreso a tal maniobra fue dura y no se hizo esperar. El 10 de abril, la Cámara de Representantes votó a favor de sacarle el estatus de ‘fast track’ al proyecto de ley que contenía el APC con Colombia. En respuesta, la Embajadora Schwab emitió un comunicado de prensa ese mismo día donde criticaba a la Cámara baja por cambiar las reglas “durante el juego”.

En los días posteriores, aquellos que apoyan el APC con Colombia intentaron que la Cámara de Representantes cambiara de parecer y volviera a retomar el proyecto de ley, pero lamentablemente eso no ha sucedido. Una razón clave podría ser que el candidato presidencial hoy electo, se opone a dicho Acuerdo.

Es difícil imaginar que el episodio con Colombia no se haya tratado de un error de cálculo por parte de la Administración Bush. Aparentemente, dicha Administración pensó que podría forzar al Congreso a aprobar el Acuerdo. La Embajadora Schwab, con toda la experiencia que posee por haber trabajado en el Senado, debió haberse dado cuenta, y si lo hizo fue incapaz de disuadir a la Administración de proseguir con esa acción imprudente.

Los costos de la estrategia de Bush son altos: Primero, el procedimiento de ‘fast track’ para el Acuerdo con Colombia ya fue utilizado, según lo reconoció la Embajadora Schwab durante un discurso del pasado 17 de noviembre. Segundo, al ‘forzar la mano’ de la vocera Nancy Pelosi, la Administración le quitó el velo a un proceso de ‘fast track’ que lleva más de 30 años. Siempre se supo que tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen el poder de votar en contra del ‘fast track’, pero hasta este año ambos bloques habían actuado como si cada uno tuviera la obligación de honrar las reglas del ‘fast-track’. Desafortunadamente este velo desapareció, y en el futuro cualquier ‘fast track’ tendrá menor credibilidad, ya sea a nivel local como internacional. Las próximas Administraciones tendrán mayores dificultades para negociar nuevos acuerdos comerciales y por ende para abrir nuevos mercados, así como para nivelar las reglas de juego para los trabajadores y las familias de los EE.UU. Tercero, al enviar el proyecto de ley del APC con Colombia sin el apoyo del Congreso, la Administración incomodó a nuestro aliado más cercano y puso en riesgo intereses vitales nuestros en América Latina.

No obstante la crítica hecha a las acciones de la Administración Bush, no puedo perdonar la insípida actitud del Congreso. La vocera Nancy Pelosi hizo mal en quitar el ‘fast track’ del proyecto de ley de implementación. También fue equívoca la decisión de los líderes demócratas de ambas Cámaras de rehusarse a trabajar con la Administración para reforzar el lenguaje del proyecto de ley de implementación. De la misma forma se equivocaron los grupos y entidades ‘pro- comercio’ presionando a la Administración y haciéndole creer que el Congreso finalmente iba a aprobar el APC.

Mirando hacia el futuro, creo que el APC con Colombia no está muerto. Según señalé anteriormente, la próxima Administración podría usar el ‘fast track’ del APC con Panamá para promulgar el acuerdo con Colombia. Incluso el APC con Colombia podría ser aprobado sin el ‘fast track’ (como sucedió con Jordania), pero para esto será necesario un Congreso bien disciplinado. Por supuesto que en el futuro inmediato la Administración de Obama tendrá que decidir si está a favor o en contra de una mayor apertura comercial. Cuando se gobierna no se puede tener posiciones ambiguas.

\* Profesor Asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

# Los biocombustibles y el derecho de la OMC

Juan Pablo Arístegui\*

El derecho de la OMC cumple un rol en la disciplina del comercio internacional de los biocombustibles que, sin embargo, se ve desafiado por la diferente “clasificación” que tienen el etanol y el biodiésel, así como por la dificultad de incluir aspectos de sostenibilidad en la producción y comercio de estos productos.

Las políticas de los países desarrollados dirigidas a alcanzar cierto grado de independencia energética, así como a cumplir compromisos internacionales en materia ambiental, en particular del cambio climático, han sido fundamentales para el surgimiento de un mercado de los biocombustibles. Junto a estas políticas, también deben tenerse en cuenta la alimentación y la agricultura, así como el comercio del producto y de las materias primas con las cuales se producen.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha descrito tres escenarios posibles para enfrentar los problemas asociados a la actual forma en cómo los países han desarrollado dichas políticas: seguir como hasta ahora, establecer una moratoria que prohíba temporalmente su producción<sup>1</sup> y desarrollar un consenso intergubernamental sobre los biocombustibles sostenibles<sup>2</sup>.

Aunque la OMC no ha sido llamada a ser el foro de dicho consenso intergubernamental, tiene un rol evidente en la disciplina de este nuevo mercado y podría colaborar a que se introduzcan reglas que promuevan la sustentabilidad en el comercio de los biocombustibles. Sin embargo, hay al menos dos obstáculos que se deben sortear antes de alcanzar semejante objetivo: por una parte, solucionar los problemas asociados a la distinta clasificación que hay entre el etanol y el biodiésel; y por otra, flexibilizar las reglas de la OMC de modo que se introduzcan exigencias de sustentabilidad en la producción de estos productos, los que han demostrado el potencial de crear riesgos tanto para la seguridad alimentaria mundial como para el cambio climático y la biodiversidad.

La noción de desarrollo sostenible en el ámbito comercial esta íntimamente relacionada con los métodos de proceso y producción (PPMs por sus siglas en inglés), así como con el enfoque analítico del ciclo de vida de los productos<sup>3</sup>. En ambos casos, el derecho de la OMC debería acomodarse para dar cabida a dichos enfoques ya que hasta el momento el principio de ‘no discriminación’ ha impedido un reconocimiento abierto sobre este tipo de cuestiones en la jurisprudencia de la Organización. Dichos enfoques resultan oportunos para enfrentar los impactos ambientales, así como los riesgos en la disponibilidad y acceso a los alimentos derivados de unos patrones de producción definidos en el sector de los biocombustibles. Todo esto es un auténtico desafío al interior de la OMC que en principio no tiene competencias sobre la producción sino solamente sobre el comercio.

## Los problemas de la clasificación y la noción de productos similares

La clasificación de los productos ha sido crucial para la operatividad del sistema de topes arancelarios, dado que los países establecen diversos límites en relación con la Cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) para diferentes tipos o clases de productos. Si bien es cierto que los Miembros no se encuentran obligados por la OMC a categorizar sus productos, la gran mayoría de ellos también pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas (OMA), donde sí que se están obligados a una clasificación en virtud del Sistema Armonizado (SA). Consecuentemente, la práctica de la OMC es negociar los topes arancelarios con base en dicho sistema.

En ese sistema de codificación se permite a los países introducir sub-clasificaciones, sin embargo, en virtud del Art. II del GATT, no pueden modificar el arancel del producto sub-clasificado más allá del tope arancelario, como tampoco pueden violar la obligación de la Cláusula NMF en relación con el tratamiento de los productos similares (*like products*). El caso *Café Español* de 1981 ilustra bien esta cuestión en cuanto a que España sub-clasificó tipos de café para distinguir el café tostado, imponiendo un arancel del 7% a tres clases de café no tostado mientras que los demás se encontraban libres de impuesto (*duty free*). Brasil se quejó por violación de NMF en virtud de que dichos tipos de cafés eran productos similares a los demás tipos<sup>4</sup>.

Pues bien, mientras el etanol cae dentro del capítulo 22 del SA de la OMA y es considerado por lo tanto como un bien agrícola en la OMC, el biodiésel cae dentro del capítulo 38, lo que lo hace un bien industrial. Así pues, las dos clases más relevantes de biocombustibles no compiten en un mismo plano en términos de las reglas de la OMC y por consiguiente son disciplinados bajo regímenes diferentes<sup>5</sup>. En efecto, mientras el etanol encuentra su marco de acción fundamentalmente bajo el Acuerdo sobre Agricultura, el biodiésel se encuentra sujeto al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

El tratamiento arancelario estadounidense del etanol es un ejemplo ilustrativo de cómo estas reglas pueden verse sobrepasadas. En efecto, la clasificación del etanol en el SA no distingue entre etanol-combustible de los demás usos del etanol (bebidas). Sin embargo, los Estados Unidos han impuesto un arancel de 54 centavos de dólar por galón de etanol para combustible y, por ende, es posible que se encuentre en franca violación con lo dispuesto en el Art. II del GATT.



Todo esto no sólo impide la obtención de información y estadísticas sobre el comercio internacional de biocombustibles, sino que frena también los esfuerzos por liberalizar los aranceles de los mismos y conduce a problemas de consistencia, certeza y eventual violación del principio de ‘no discriminación’ al momento de aplicar las obligaciones existentes de la OMC.

Una complicación adicional a la discusión sobre la clasificación es la posibilidad de entender a los biocombustibles no ya como bienes agrícolas o industriales, sino como bienes (y servicios) ambientales. El párrafo 31 (iii) de la Declaración Ministerial de Doha dio inicio a una serie de negociaciones sobre “la reducción o, según proceda, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos”. El objetivo detrás de este mandato consiste en que las negociaciones sobre liberalización comercial en bienes y servicios ambientales deberían mejorar el mutuo apoyo entre comercio y medio ambiente, sugiriendo un potencial resultado de ganar-ganar. Las negociaciones se centraron fundamentalmente en definir qué se entiende por bienes ambientales y los criterios a utilizar.

De acuerdo con diversos países liderados por Brasil, la definición de bienes ambientales cubriría, *inter alia*, los productos relativos a las energías renovables, dentro de las cuales se incluyen el biodiésel, el etanol y los productos relacionados. Más allá de los problemas sobre el criterio para determinar qué se considera como bien ambiental (las listas suman más de 480 productos), ocurre que el etanol, clasificado como un bien agrícola, quedó fuera del mandato del Grupo Negociador responsable de diseñar las modalidades de reducciones arancelarias para los bienes ambientales.

En cuanto al problema de los productos similares, cabe señalar que puede darse el caso de que por razones de política ambiental un Miembro de la OMC quiera fomentar el uso de biocombustibles, reduciendo para ello los aranceles a pesar de mantenerlos cuando el uso de dichos productos no se destine a combustible. Para ello debería, según vimos *supra*, sub-clasificar el producto dentro de su nomenclatura doméstica<sup>6</sup>.

Esta opción unilateral, legal hasta el momento, podría contestarse bajo la discusión de lo que se entiende por producto similar en relación con NMF. Uno de los problemas a resolver es si la similitud, en este caso, es independiente de las preferencias y percepciones de los consumidores en relación con el uso de ese producto. Si la respuesta fuera negativa, tendríamos que concluir que para este caso los biocombustibles y los productos físicamente similares destinados a usos distintos del combustible deberían considerarse no-similares en tanto que no están compitiendo en el mismo mercado de consumidores.

Ahora bien, si un Miembro de la OMC deseara reducir sus aranceles a las importaciones de biocombustibles basado completamente en razones medioambientales, dicho Miembro querrá lógicamente limitar dichas reducciones arancelarias a los biocombustibles que tengan impacto ambiental final positivo de acuerdo con el enfoque del ciclo de vida de ese producto. La pregunta que surge, sin embargo, es si dicha sub-clasificación sería consistente con la obligación de la NMF

en relación con los bienes similares, o si por el contrario, podría exitosamente desafiarse por otro Miembro de la OMC que adujera que sus exportaciones de biocombustibles no gozan del mismo arancel porque no cumple con los criterios de impacto medioambiental del país importador para calificar y acceder a la reducción arancelaria.

Por consiguiente, la evaluación acerca de si dos o más productos son similares nos conduce nuevamente al problema sobre si es válido distinguir en función de los PPMs o si por el contrario debería atenderse sólo a las características físicas del bien o bienes.

## El SGP y la posibilidad de requerimientos de sustentabilidad

Dentro de las preferencias arancelarias en el derecho de la OMC destaca lo que se conoce como Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que alude a aquellas preferencias comerciales otorgadas unilateralmente por países desarrollados a productos originarios de países en desarrollo o menos adelantados.

En la actualidad, sólo la UE ha incluido a los biocombustibles provenientes de países en desarrollo bajo el SGP (aunque recientemente se excluyó del SGP a las exportaciones de biocombustibles provenientes de Pakistán, quien suministra el 20% del etanol importado por la UE, con motivo de la investigación abierta por la UE de *antidumping* en contra de este país). Los Estados Unidos, en cambio, removieron los biocombustibles de este sistema en la década de los 80.

Lo que interesa destacar es que bajo el SGP (cuyas reglas especiales se resumen en que tales preferencias deben ser generales, no discriminatorias y la no necesidad de reciprocidad) es posible identificar algunos temas de importancia relativos al desarrollo sostenible o producción sustentable, en el sentido de que es posible condicionar la concesión de la preferencia a estándares de sustentabilidad. El problema puede surgir en cuanto a la posibilidad de distinguir entre distintos países en desarrollo en razón de criterios de sostenibilidad, como se desprende del caso *CE-Preferencias Arancelarias*.

De acuerdo con Enrique Rene de Vera, el SGP puede otorgar un marco de discriminación lícita en contra de la producción insostenible de biocombustibles<sup>7</sup>, ya que si es posible otorgar preferencias bajo ciertas condiciones -y al efecto cita la negativa de los Estados Unidos a conceder preferencias a países comunistas-, asimismo se pueden aplicar a la producción de biocombustibles. De hecho, las exigencias de sostenibilidad ya existen en el marco del esquema del SGP adoptado por la UE aplicado a las maderas tropicales, lo que proveería un modelo a seguir para los biocombustibles. Bajo el SGP de la UE, sólo las maderas que han sido certificadas como sustentables por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales reúnen los requisitos para las preferencias arancelarias.

## Conclusiones

Los biocombustibles se presentan como una alternativa interesante para resolver problemas de independencia energética, en particular para el sector transporte. Sin embargo,

los biocombustibles de primera generación<sup>8</sup> han develado la creación de ciertos riesgos de carácter global y que por lo tanto necesitan una solución *ad hoc*. La OMC debería pronunciarse al respecto dada la importancia y la incidencia del comercio internacional de este producto en dichos riesgos. Lo primero que salta a la vista es la necesidad de una mayor unidad en el tratamiento de los biocombustibles teniendo presente la diversidad intrínseca del producto.

Por su parte, la noción de sostenibilidad en el comercio internacional, junto a lo anterior, es el aspecto más complejo por resolver. No debemos olvidar la necesidad de dar cabida al enfoque comprensivo de ciclo de vida así como a la noción de métodos de proceso y producción que, de una u otra manera, entrecruzan las normas del sistema OMC cuando queremos aplicarlas al sector de los biocombustibles.

Creemos que si fuera posible introducir de forma sistemática estas nociones, de modo de aplicarlas en su justa medida, es decir, sin que con ellas se encubran restricciones arbitrarias al comercio, se ayudaría a resolver los riesgos creados por el sector. Además, ubicaría la producción donde es más eficiente, donde existen las ventajas comparativas más evidentes, sin que por eso se ponga en peligro la seguridad alimentaria, y a la vez, se colabore con los problemas ambientales como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad.

\* Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (juanpablo.aristegui@upf.edu). Investigador pasante en la Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.

<sup>1</sup> Jean Ziegler, ex Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, ha llamado a una prohibición de al menos 5 años para los biocombustibles de primera generación.

<sup>2</sup> FAO, Bioenergía, Seguridad y Sostenibilidad Alimentarias: Hacia el Establecimiento de un Marco Internacional (Roma: FAO, 2008. Doc. HLC/08/INF/3). Junto a la FAO, existen hoy diversas iniciativas internacionales: La Asociación mundial de la bioenergía (GBEP); la Mesa redonda sobre los biocombustibles; el Foro Internacional de Biocombustibles; y el mecanismo interinstitucional de las Naciones Unidas, ONU-Energía.

<sup>3</sup> El Principio 8 de la Declaración de Río señala: "Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas".

<sup>4</sup> Véase, caso Café Español L/5135, junio 1981, BISD 28S/102, donde Brasil reclamó la discriminación entre diversos tipos de cafés y topes arancelarios.

<sup>5</sup> Véase: Motaal, D.A., "The Biofuels Landscape: Is There a Role for the WTO?", en *Journal of World Trade*, n° 42(1), 2008, p. 76.

<sup>6</sup> International Food & Agricultural Trade Policy Council, WTO Disciplines and Biofuels: Opportunities and Constraints in the Creation of a Global Marketplace (IPC Discussion paper, October 2006), pp. 9 y ss.

<sup>7</sup> Véase: Rene de Vera, E., "The WTO and Biofuels: The possibility of unilateral sustainability requirement", en *Chicago Journal of International Law*, invierno de 2008.

<sup>8</sup> Se distingue entre biocombustibles de primera y segunda generación dependiendo de donde proviene la materia prima con el cual se produce. Mientras los biocombustibles de primera generación son producto de los denominados cultivos energéticos, los de segunda generación son el resultado de materia lignocelulósica (biomasa procedente de la madera y las grasas), que requieren de más tecnología para su producción comercial pero todo apunta que deberían ganar terreno debido a su menor injerencia en cuestiones alimentarias y ambientales.

## Bolivia demandaría a EE.UU. ante la OMC por pérdida de preferencias

Bolivia está considerando iniciar un procedimiento legal ante la OMC por la decisión del Presidente Bush de suspender sus beneficios en el marco de las preferencias comerciales otorgadas a los países andinos.

La suspensión formal ocurrida este 25 de noviembre no se esperaba, aunque la Administración estadounidense había advertido desde septiembre que Bolivia estaba perdiendo parte de sus preferencias bajo la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) debido a sus fallidos intentos en materia de cooperación en la lucha antinarcóticos. Así, la suspensión entró en vigor el 15 de diciembre, aunque Bolivia podría 'darle vuelta' si 'mejora su desempeño' respecto a los criterios exigidos por los EE.UU.

### ¿Preferencias arbitrarias?

La posible demanda de Bolivia en la OMC podría construirse bajo el argumento de que una vez que se establecen los criterios para el programa de preferencias, los beneficios deben estar disponibles para todos los países que satisfagan los requisitos. Ese principio fue confirmado en 2004 por el Órgano de Apelación en el caso *CE - Preferencias Arancelarias*. Si Bolivia decide comenzar un procedimiento legal, la OMC tendrá que definir si la exclusión de Bolivia del programa de la ATPDEA obedece o no a una aplicación arbitraria de la ley, y es ahí donde precisamente se encuentra la mayor complicación.

Los EE.UU. han aducido los constantes aumentos en la producción de cocaína y el apoyo del gobierno para el cultivo de la coca, como los motivos para esta suspensión. Según indican autoridades bolivianas, la política 'coca sí, cocaína no' del Presidente Evo Morales, ha contribuido a que el país haya logrado más avances en la erradicación del cultivo ilegal y en el combate al comercio de cocaína, en comparación con Colombia o Perú. Según cifras de las Naciones Unidas, durante el 2007 el cultivo de la coca aumentó en un 27 por ciento en Colombia, y un cinco y cuatro por ciento en Bolivia y Perú.

Para compensar las pérdidas, Bolivia negoció con Venezuela un acuerdo comercial por el que podrá exportar sus textiles (de diciembre de 2008 a febrero de 2009) por un valor de USD 42 millones. El gobierno boliviano anunció que también otorgará créditos para contrarrestar el aumento de los aranceles. El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Ernesto Antelo, dijo que tales medidas no son suficientes para compensar la pérdida de competitividad ocasionada por la salida del ATPDEA.

# El conocimiento tradicional y los TLC, lecciones de Costa Rica

Jorge Cabrera Medaglia\*

El tema de los derechos de propiedad intelectual (DPI) se ha encontrado inmerso en intensos debates y polémicas respecto a la conveniencia y a la oportunidad de vincular esta temática con los tratados de comercio. En relación con el ambiente, y debido al surgimiento de un marco legal internacional contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Tratado de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TI), se ha insistido en la existencia de un conflicto entre ciertas tendencias orientadas al fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y los objetivos de conservar, utilizar sosteniblemente la biodiversidad y distribuir equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. No obstante, en opinión del autor, es posible y deseable establecer sinergias que permitan una relación de apoyo recíproco entre los DPI y los tratados ambientales.

Recientemente tratados bilaterales de libre comercio han tratado de responder a esta problemática, intentando crear una adecuada sinergia entre los sistemas de DPI y la biodiversidad. Un ejemplo de estas iniciativas es el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EE.UU. En la “Carta Paralela”<sup>1</sup> acordada entre ambos países se establece el reconocimiento de la importancia de elementos tales como el conocimiento tradicional (CT), la biodiversidad, el consentimiento informado, la distribución justa y equitativa del uso de CT y recursos genéticos, entre otros.

## La Reforma a la Ley de Biodiversidad (LB) y la legislación de implementación del CAFTA-DR

Ejemplo de lo anterior es una reciente discusión que se dio a nivel constitucional en Costa Rica. El voto de la Sala Constitucional (SC, No. 8-13832 del 11 de septiembre de 2008) consideró inconstitucional el último Proyecto de Ley de la denominada “Agenda de Implementación” del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés), confirmando así la relación existente entre los tratados de libre comercio, la biodiversidad (en este caso el CT) y los DPI. En un Voto 4 a 3, la mayoría de los miembros de la Sala consideraron inconstitucional el procedimiento seguido para incorporar varias modificaciones a la LB, contenidas en el Proyecto de Ley No. 16955<sup>2</sup>. Esa resolución motivó que el Poder Ejecutivo solicitara una prórroga a los otros miembros del Tratado a efectos de poner en vigencia el mismo<sup>3</sup>.

El cambio más relevante, desde la perspectiva de los efectos del fallo de la Sala, se relaciona con la modificación al inciso 6 del artículo 78 de la LB. El artículo 78 de la Ley en su versión original excluía de la protección de propiedad intelectual: “Las invenciones esencialmente derivadas del

conocimiento asociado o prácticas biológicas tradicionales o en el dominio público”.

La reforma que pretendía introducir el Proyecto de Ley No. 16955 radicaba en dos aspectos: 1. Se establecía que la exclusión de protección que se encuentra en el encabezado del artículo lo era con relación únicamente a las patentes y no a otras formas de propiedad intelectual; 2. se agregaba, después de las palabras “dominio público” del inciso 6, la frase “siempre que no cumplan con los requisitos de patentabilidad de la Ley número 6867 de 23 de junio de 1983 (Ley de Patentes) y sus reformas”.

El proyecto fue consultado a la Sala por un grupo de diputados y en la respuesta a esa consulta la mayoría de los magistrados consideraron que el punto medular del asunto era establecer si los cambios introducidos en la LB afectaban directamente a los pueblos indígenas, y por ende, si resultaba imperativo consultarles, tal y como lo establece la normativa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para los magistrados, al convertir en patentable lo que antes no lo era, “objetivamente es un cambio que afecta directamente los intereses de los pueblos indígenas, y por lo tanto, conforme a la normativa vigente del Convenio 169 de la OIT, debió ser consultado a éstos, disposición que es vinculante para el país”.

Resulta interesante conocer el voto de minoría que presenta una visión diferente del problema y expone las razones por las cuales el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no resulta aplicable. En dicho voto, los magistrados consideran que el ordenamiento jurídico costarricense ya establecía una protección específica a los CT de las comunidades indígenas, concretamente en el CDB y Anexos, así como en la propia la LB. Por ende, como la reforma consultada deja vigente las normas mencionadas, establece que las comunidades indígenas no se ven afectadas y por ello no debe consultárseles.

## Algunas reflexiones

Varias preguntas pueden formularse para entender mejor la relación entre la biodiversidad, CT, propiedad intelectual y el CAFTA-DR:

¿Existe una contradicción entre la redacción actual de la LB con el CAFTA-DR? En mi opinión la respuesta resulta negativa. El artículo 78 inciso 6 de dicha Ley fue pensado, al igual que otros de los incisos de este mismo numeral, con el propósito de impedir el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos (RG) o conocimiento tradicional asociado, sin que se hubiesen cumplido adecuadamente los requisitos de patentabilidad (especialmente la novedad y el nivel inventivo). Se pretendió evitar casos de

acceso ilegal, apropiación indebida o “biopiratería”, que han sufrido países y comunidades, especialmente en América Latina, Asia y África.

Aunque los reportes de organizaciones no gubernamentales sobre estos casos pueden ser debatibles, no cabe duda de que situaciones de esta naturaleza se han producido. Ejemplos como la maca y el ayahuasca en Perú, el frijol enola en México, entre otros, han sido frecuentemente citados como justificación para emprender modificaciones al texto o funcionamiento de los sistemas de DPI, particularmente las patentes, que a la fecha se han mostrado como uno de los principales causantes de las denuncias sobre apropiación indebida o “biopiratería”<sup>4</sup>.

En cualquier caso, la normativa pretendió impedir que se otorguen patentes especialmente sin nivel inventivo y novedad sobre RG o CT costarricenses. Esta disposición, y en general el vínculo entre propiedad intelectual y biodiversidad, no es inusual en LB o similares y tiene como fundamento cumplir con el CDB. Asimismo, existen normas que restringen la posibilidad de solicitar DPI sobre recursos accedidos sin permiso previo del país (LB de la India, Normas de Acceso de Uganda, Ley de Recursos Genéticos y Derechos Comunitarios de Etiopía); obligan a notificar antes de solicitar estos derechos (LB de Bután); o requieren que se revele el origen de los recursos genéticos o se presente evidencia del cumplimiento con las legislaciones nacionales de biodiversidad en las solicitudes de estos derechos (Medida Provisional de Acceso a Recursos Genéticos de Brasil, Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos de Panamá, Decisiones 391 y 486 de la Comunidad Andina, entre otras; además algunas leyes de propiedad intelectual de países desarrollados, con distintas redacciones y consecuencias legales también contemplan algo similar)<sup>5</sup>.

La LB ha estado vigente desde mayo de 1998. Desde entonces, y a pesar de que el Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC se encontraba igualmente vigente en el país, nunca fue cuestionada la compatibilidad de la LB con aquel (al menos en los mecanismos formales de consultas<sup>6</sup>). Si bien es cierto que el CAFTA-DR contiene algunas precisiones en materia de patentabilidad que no se encuentran en el texto del ADPIC (contempla una definición del criterio de “utilidad”, etc.), en general ambos tratados son congruentes con las condiciones de patentabilidad. Por lo tanto, tampoco debería considerarse - ahora a la luz del CAFTA-DR - que las disposiciones del artículo 78 son incompatibles con el texto del acuerdo comercial. Por supuesto que esta conclusión respecto a la compatibilidad de la LB con el ADPIC puede no ser compartida por otros países.

La segunda pregunta se enfoca desde un criterio de oportunidad de la propuesta: ¿Es inconveniente la modificación (a la luz de la protección de la biodiversidad y del CT) desde el punto de vista sustantivo? A mi juicio, la propuesta de reforma no desprotege la biodiversidad o el conocimiento tradicional asociado (objetivos buscados por la LB). Esta tiende a clarificar la normativa, por ejemplo, se modifica el inciso 1 del artículo 78 para excluir también de la patentabilidad, además del ADN, nucleótidos y aminoácidos, a menos que

se cumplan las condiciones de patentabilidad, en cuyo caso la sustancia debería ser novedosa y tener nivel inventivo. La redacción original tenía por propósito limitar la posibilidad de patentar secuencias naturales de ADN cuya existencia no era conocida, incluso sin necesidad de indicar cuál es su función. Impedir este tipo de reivindicaciones no es nuevo y pueden citarse diversos ejemplos en el derecho comparado (por ejemplo, la Directiva Europea para la Protección Jurídica de la Biotecnología 98/44/CE requiere que se indique la función de las secuencias para ser tutelables).

Con respecto al inciso 6, se aclara que las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público no serán protegidas si no cumplen los requisitos de patentabilidad. La principal diferencia radica en que mientras la legislación actual se refiere a la exclusión de todas las formas de propiedad intelectual, la propuesta se limita al caso específico de las patentes por constituir éste el mecanismo por excelencia que ha permitido la apropiación indebida de CT. Esta lógica se encuentra en el actual inciso 6, al referirse a “invenciones”, materia que se tutela por medio de las patentes.

Existe por tanto una justificación legal y política para la redacción actual del artículo 78, tanto su encabezado como el inciso 6 de la LB, y no hay contradicción entre el CAFTA-DR y la legislación nacional en materia de biodiversidad.

En conclusión, la sentencia demuestra la tensión existente y las diferentes visiones sobre esta temática. A la vez, desde la perspectiva latinoamericana y de los tratados bilaterales de comercio, prueba que la relación existente entre las LB y la normativa para la protección del CT (basadas en el CDB), es un asunto aún no resuelto y por el contrario plenamente vigente. Además, el proceso de implementación de los tratados de libre comercio - a efectos de obtener la certificación por parte de EE.UU. y la consecuente vigencia del mismo se pueden convertir en otro proceso de negociación respecto al alcance de las obligaciones de los acuerdos.

\* Profesor de Derecho Ambiental, Maestría en Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica y Asesor Legal del Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, Costa Rica.

<sup>1</sup> El carácter legal de las “Cartas Paralelas” ha sido además fuertemente cuestionado. En principio, no forman parte del texto y se trataría de instrumentos que podrían ser utilizados para la interpretación del Acuerdo.

<sup>2</sup> El Proyecto de Ley reforma diversas leyes de propiedad intelectual, entre ellas la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Patentes, así como la Ley de Biodiversidad objeto principal de este artículo. Posteriormente, el Proyecto de Ley fue modificado, eliminado la redacción del inciso 6 del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, manteniendo por tanto su versión actual. La Sala Constitucional determinó (5 a 2) que esta nueva redacción no era contraria a la Constitución Política. Finalmente, fue publicado como Ley No. 8686 en La Gaceta del 26 de noviembre del 2008.

<sup>3</sup> Finalmente los países aceptaron otorgar la referida ampliación hasta el 1 de enero de 2009.

<sup>4</sup> Cfr. An Analysis of claims of unauthorized access and misappropriation of genetic resources and associated traditional knowledge, UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/6, enero de 2006, disponible en [biodiv.org](http://biodiv.org).

<sup>5</sup> Cfr. J. Cabrera Medaglia y C. López, Addressing the Problems of Access: protecting sources, while giving users certainty; IUCN, Bonn, 2007.

<sup>6</sup> Ciertamente, la norma pudo haber sido cuestionada en otro momento ante la OMC. No obstante, en ese supuesto sería un panel quien determinaría si la disposición es o no compatible con la OMC.



# La OPS ante el desafío de la salud, la innovación y la propiedad intelectual

Jaume Vidal\*

El presente artículo busca presentar las principales líneas de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar, desde un punto de vista regional, la Estrategia y Plan de Acción Globales emanados de las discusiones del Grupo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (IGWG por sus siglas en inglés) auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mandato del IGWG era ambicioso: definir una estrategia y plan de acción globales que dieran respuesta a muchos de los desafíos reconocidos por el informe de la Comisión sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual en 2005, retos que sólo podían ser resueltos y confrontados desde una posición común y consensuada de la comunidad internacional. Los vértices de la problemática se identificaron, por un lado, con el necesario estímulo a la innovación en el campo farmacéutico y por el otro, con el imperativo del acceso por parte de las poblaciones. Igualmente, debían incluirse otros factores en la discusión: desde los vacíos en investigación para enfermedades que afectan desproporcionadamente a países en desarrollo, hasta los desafíos de la financiación para sustentar el desarrollo de medicamentos por encima de eventuales beneficios comerciales. Otras complicaciones se refieren a los tradicionales obstáculos al acceso a medicamentos: carencias de los sistemas públicos de salud, deficiencias en los mecanismos de distribución o dificultades inherentes a la adaptación de tratamientos y formulaciones para poblaciones en situación de vulnerabilidad.

## Perspectiva regional de una realidad global

La responsabilidad de la OPS en la implementación de la Estrategia en las Américas en coordinación con la OMS es especialmente significativa y debe ser interpretada a la luz del proceso de discusión del IGWG en la región<sup>1</sup>, pero también como resultado del creciente interés de los Estados Miembros de la OPS para que ésta se haga cargo de la cuestión de la salud pública, innovación y propiedad intelectual. Así, el desarrollo de una perspectiva regional obedece en gran medida a la constatación, desde diversos sectores, de la necesidad de adaptar un texto consensuado a nivel global a las necesidades y características de los contextos regionales y sub-regionales.

Desde la OPS, la prioridad inmediata es la difusión y diseminación del texto de la Estrategia contenido en la resolución WHA61.21 como nueva herramienta de salud pública a disposición de autoridades estatales y otros actores que participan en la mejora de las condiciones de acceso a productos sanitarios y promoción de la innovación tecnológica. La resolución CD.48.R15 aprobada por el Consejo Directivo de la Organización confirma esta dirección.

El marco regional se encuentra definido por la existencia tanto de desafíos comunes constatados a través de documentos como la Agenda de Salud para las Américas (2008-2017), así como de marcos de cooperación, concertación y diálogo colectivos en el ámbito de la salud pública. El objetivo es

dar respuesta a tres grandes desafíos transversales: la promoción de las mejoras de las condiciones de acceso (noción ampliada que va más allá de los medicamentos esenciales y productos sanitarios), la necesidad de sistematizar la evaluación tecnológica en el marco del diseño de políticas públicas y el desarrollo de políticas de Inversión y Desarrollo (I+D) que tomen en consideración las prioridades nacionales y la existencia de marcos regionales de cooperación.

Los contextos sub-regionales no sólo se encuentran determinados por las divisiones geográficas, sino también por factores sanitarios (perfiles epidemiológicos) y otras circunstancias (acuerdos de libre comercio). La existencia en la región de diversas experiencias de integración económica y comercial con mandatos en cuestiones de salud pública, innovación y propiedad intelectual, facilita la identificación de contrapartes con las cuales plantear y estructurar ejercicios de cooperación descentralizada. Estas servirían de marco de socialización de ejercicios de cooperación (*mejores prácticas*) y también como motor de la cooperación inter-país (cooperación Sur-Sur) y entre sub-regiones.

## Cooperación y acompañamiento técnico

Como se ha mencionado anteriormente, una implementación efectiva de la Estrategia a través de la perspectiva regional, debe ser incorporada en las funciones institucionales de la Organización por medio de sus unidades técnicas, en coordinación estrecha con las oficinas país y en permanente diálogo con otros actores involucrados. Se distinguen tres líneas de acción, complementarias e interrelacionadas que abarcan todos los elementos de la estrategia. Cada una de ellas observa un objetivo principal y varios secundarios.

**Acceso.** El objetivo principal es mejorar las condiciones de acceso a tecnologías sanitarias e información asociada (ensayos clínicos, publicaciones científicas, etc.) con la finalidad de estimular la innovación e incidir en aquellos factores identificados como obstáculos al acceso.

Como objetivos secundarios se considera, en primer lugar, la necesidad de promover el acceso a información estratégica como parte de los esfuerzos públicos de estímulo a la I+D nacionales, asociados a procesos de evaluación y vinculación con prioridades previamente establecidas en relación con el marco de actuación. En tal sentido se apoyarán las iniciativas de difusión de información y los regímenes cooperativos de investigación basados en el acceso abierto a bases de datos.

En segundo lugar, se buscará fortalecer las capacidades tanto de diseño como de implementación y seguimiento de las políticas y estrategias para la promoción y uso de medicamentos genéricos.

La herramienta de referencia en este caso será la recientemente finalizada estrategia regional de genéricos de la OPS.

En tercer lugar, se promoverán los procesos técnicos-administrativos (reformas) para agilizar el registro sanitario de medicamentos y tecnologías prioritarios. Se buscará la adecuación de los marcos regulatorios para asegurar una introducción rápida y un acceso efectivo por parte de las poblaciones a nuevas tecnologías y productos sanitarios.

Por último, se buscará apoyar mecanismos para la evaluación y/o regulación de precios de medicamentos y tecnologías basadas en el valor añadido (y/o terapéutico) de la innovación. Para ello, se destinarán recursos y proporcionará apoyo técnico para el reforzamiento de los mecanismos de análisis y de contención del gasto en los esquemas gubernativos nacionales<sup>2</sup>.

**Innovación.** El apoyo principal se centraría en los esfuerzos nacionales y sub-regionales de promoción de la innovación e investigación en salud. Como objetivos secundarios se toma en consideración la necesidad de consolidar el acceso como un elemento insoslayable en el diseño e implementación de políticas oficiales para el estímulo de I+D. Así se motivarán por un lado, la definición de las prioridades e identificación de las capacidades de innovación tecnológica en los ámbitos nacionales y sub-regionales mediante el diálogo participativo, y por el otro, se brindará apoyo a la identificación y promoción de nuevos modelos de financiación sostenible que incorporen criterios de salud pública (enfermedades desatendidas o descuidadas). En el marco de la estrategia de difusión de información, redes y grupos de trabajo se potenciarán y darán a conocer regímenes e instrumentos para la promoción y estimulación de la innovación tecnológica.

**Gestión de derechos de propiedad intelectual.** El objetivo principal es enmarcar la utilización e implementación de las flexibilidades tanto del Acuerdo ADPIC como de los acuerdos de libre comercio (tanto en su fase de negociación como de posterior aplicación) en un ámbito legal e institucional coherente. De manera paralela se apoyará la apropiación real y efectiva de la Declaración de Doha a nivel estatal, sub-regional y regional buscando que el máximo número de Estados y organizaciones sub-regionales adopten, aprueben y adapten la declaración en sus marcos jurídicos y normativos antes del 2011. Este objetivo principal se apoyaría en tres objetivos secundarios interrelacionados bajo la necesidad de aumentar la eficiencia del actual sistema de protección de la propiedad intelectual y su incidencia en las políticas de salud pública.

En primer lugar, se buscará dar a conocer los trabajos y producción bibliográfica con enfoque o origen en las Américas en relación con modificaciones a marcos regulatorios, enmiendas legales, flexibilidades del ADPIC y temas relacionados a través de una lista de distribución electrónica en colaboración con instituciones educativas y centros de referencia como la Biblioteca Virtual en Salud (BIREME). En segundo término se apoyarán las dinámicas de colaboración interinstitucional en el ámbito de la propiedad intelectual entre autoridades sanitarias y otros órganos del Estado, identificando un conjunto de mejores prácticas y modelos burocrático-administrativos que puedan ser replicados. Por último, se buscará explorar las posibilidades de mejora en la eficiencia y la eficacia de

los procesos administrativos y burocráticos asociados a la concesión de patentes. Lo anterior incluiría la identificación de un instrumento legislativo y marco normativo, construido a partir de aquellos marcos jurídicos que respondan de forma más adecuada a las necesidades sanitarias nacionales.

Una de las vías principales para conseguir los mencionados objetivos será la identificación de países especialmente interesados en recibir capacitación técnica, junto con aquellos dispuestos a ejercer papeles de liderazgo en áreas subregionales, además de la conformación para seguimiento de un conjunto de funcionarios y profesionales capacitados como multiplicadores. El empoderamiento y responsabilización de las autoridades nacionales constituye un objetivo esencial a mediano y largo plazo.

## Conclusiones

La discusión y aprobación de la Estrategia y la construcción de una perspectiva regional suponen un cambio fundamental en el escenario y en los factores que determinan la discusión entre las diferentes opciones y agendas. Tal transformación obedece tanto a la constatación de la interrelación de los elementos involucrados en el ciclo de innovación y acceso, como al convencimiento casi unánime de la necesaria colaboración para conseguir objetivos comunes como los recogidos en la Estrategia.

Sin embargo, este nuevo escenario se erige en una coyuntura pre-establecida a la que hay que dar respuesta y, en algunos casos, continuidad. Más allá de los desafíos estructurales que afectan al sector salud (obstáculos al acceso a medicamentos esenciales, exclusión de los servicios de salud, dificultades para una vida sana, entre otros) existen otras iniciativas cuya confluencia con la implementación de la Estrategia y su perspectiva regional es esencial. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio comparten algunas de las metas establecidas en el documento contenido en la resolución WHA61.21, confirmando no sólo la necesaria sinergia entre actores estatales e internacionales, sino haciéndola más urgente.

La OPS asume el reto de acompañar la implementación regional de la Estrategia para dar respuesta práctica y técnica a una demanda claramente expresada por los Estados Miembros de la Organización. En esa tarea garantiza la innovación, asegurando un acceso equitativo y promocionando la necesaria equidad para un desarrollo sostenible de las capacidades de los pueblos.

\* Experto Asociado de la Unidad de Medicamentos Esenciales de la Área de Tecnología Sanitaria e Investigación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/ Washington. [vidaljau@paho.org](mailto:vidaljau@paho.org)

<sup>1</sup> El proceso de discusión del IGWG en las Américas, con el apoyo técnico y acompañamiento de la OPS, conoció tres reuniones sub-regionales (La Paz, agosto 2007, Rio, septiembre 2007, Paramaribo, febrero 2008) y una consulta regional en Ottawa (octubre 2007). Producto de este diálogo intrarregional surgió el llamado documento de Rio, conjunto de propuestas alternativas que fueron en gran medida incorporadas al texto final de la Estrategia Global. El texto está disponible en: [http://www.who.int/phi/public\\_hearings/second/regional\\_consultations/Subregional\\_Consensus\\_Document.pdf](http://www.who.int/phi/public_hearings/second/regional_consultations/Subregional_Consensus_Document.pdf).

<sup>2</sup> Tomando en consideración tanto los lineamientos estratégicos sobre políticas de acceso, trazados por OPS mediante la resolución CD.45. R7 *Acceso a los medicamentos*, aprobada en octubre de 2004, así como el Documento para un política regional de medicamentos genéricos aprobado recientemente por la Organización.

# ICTSD al día

## Mitigación del cambio climático

### Diálogos en la Conferencia de Poznan

#### Tecnologías de mitigación del cambio climático en los sectores del suministro de energía y la construcción

2 de diciembre, 2008

Este evento presentó los resultados de un análisis sobre el comercio de bienes relacionados con el sector de la energía y de la construcción. Los dos sectores fueron identificados en el reciente informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como poseedores de un enorme potencial en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los interrogantes que se abordaron en esta reunión se destacan si existen o no barreras comerciales en dichos sectores, y si una posible liberalización podría contribuir a la difusión de tecnologías 'limpias'.

#### Retos y oportunidades para un marco post-2012 en financiamiento y transferencia de tecnología

5 de diciembre, 2008

El evento paralelo intentó identificar y analizar los elementos que pueden constituir el cuadro institucional y el mecanismo para el desarrollo y transferencia de tecnología en materia de cambio climático.

Entre los temas abordados cabe destacar: las experiencias sobre transferencia de tecnologías en el sector de la salud, específicamente en el campo de la propiedad intelectual. También se abordaron aquellas experiencias sobre transferencia de tecnología en otras negociaciones y se cuestionó sobre si las mismas pueden aplicarse en esta área.

#### Reunión de expertos sobre "Cambio climático - el papel del comercio agrícola y de alimentos"

9 de diciembre, 2008

El objetivo de esta reunión fue identificar las prioridades para la investigación y el análisis que contribuyan con soluciones efectivas hacia la cooperación internacional para un acuerdo global sobre el clima. Algunos de los temas analizados en la reunión fueron:

- Los impactos del cambio climático en la producción agrícola y viceversa.
- El rol de la política sobre comercio agrícola y de alimentos en la adaptación y mitigación del cambio climático.
- Las implicancias de las políticas sobre cambio climático en el comercio agrícola.
- Los impactos en el comercio generados a partir del traspaso hacia un mercado de emisiones de carbono.

Más información en: <http://ictsd.net/programmes/energy/>

## Entre el comercio y el desarrollo sostenible

Puentes tiene como objetivo el reforzar la capacidad de los actores sociales en el área de comercio internacional y desarrollo sostenible, poniendo a su disposición información y análisis relevante para una reflexión más informada sobre estos temas. Además, busca crear un espacio de comunicación y de generación de ideas para todos aquellos involucrados en los procesos de formulación de políticas y de negociaciones internacionales.

Puentes es publicada por el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD), y por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica.

### Comité Editorial

Maximiliano Chab  
Greivin Hernández González  
Carlos Murillo Rodríguez  
María Julia Oliva

### Contribuyeron para este número

Daniela Álvarez Keller  
Perla Buenrostro  
Maximiliano Chab  
Greivin Hernández González  
María Julia Oliva

### ICTSD

Director ejecutivo:  
Ricardo Meléndez Ortiz  
7, chemin de Balxert  
1219, Ginebra, Suiza  
[puentes@ictsd.ch](mailto:puentes@ictsd.ch)  
[www.ictsd.org](http://www.ictsd.org)

### CINPE

Director: Rafael Díaz  
Tel.: (506) 2263-4550  
Apdo. Postal 2393-3000 Heredia,  
Costa Rica  
[www.cinpe.una.ac.cr](http://www.cinpe.una.ac.cr)

La producción de PUENTES entre el comercio y el desarrollo sostenible ha sido posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes.

Para suscribirse gratuitamente, envíe un correo electrónico a [puentes@ictsd.ch](mailto:puentes@ictsd.ch) incluyendo la palabra "suscripción" en el asunto.

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en Puentes son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de ICTSD, de CINPE, ni de las instituciones que ellos representan.

## EVENTOS

### DICIEMBRE 2008

- 19-20 VI Foro Mundial de Desarrollo Sostenible 2008. Prioridades, Financiamiento, Gobernanza. París, Francia. <http://www.fmdd.fr>

### ENERO 2009

- 26 Conference on the Establishment of the International Renewable Energy Agency (IRENA). Bonn, Alemania. <http://www.irena.org/foundingcon.htm>
- 27-30 Group of Technical and Legal Experts on Compliance in the context of the International Regime on Access and Benefit-sharing. Tokyo, Japón. <http://www.cbd.int>

### FEBRERO

- 2-4 Regional awareness raising and capacity -building workshop on the guidelines on best available techniques and provisional guidance on best environmental practices. Sao Paulo, Brasil. <http://chm.pops.int>
- 4-5 Reunión multianual de expertos sobre la cooperación internacional: cooperación Sur-Sur e integración regional. Ginebra, Suiza. <http://www.unctad.org>
- 16-20 25th Session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum, UNEP. Nairobi, Kenya. <http://www.unep.org>

### MARZO

- 9-11 Fifth Coordination Meeting for Governments and Organizations Implementing or Funding Biosafety Capacity-building Activities. San José, Costa Rica. <http://www.cbd.int>
- 10-12 International Scientific Congress on Climate Change. Global Risks, Challenges and Decisions. Copenhagen, Dinamarca. <http://climatecongress.ku.dk>
- 17-21 18a Reunión de la Comisión de Plantas de Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, CITES. Buenos Aires, Argentina. <http://www.cites.org>
- 27-31 Reunión Anual 2009 del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Medellín, Colombia. <http://www.iadb.org>

## PUBLICACIONES

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. (2008). *Oportunidades de comercio e inversión entre América Latina y Asia - Pacífico. El vínculo con APEC*. Santiago.

Ellis, S. (2008). *The Changing Climate for Food and Agriculture: A Literature Review*. Minnesota: IATP.

Estado de la Nación. (2008). *Informe estado de la región en desarrollo humano sostenible. Un informe desde Centroamérica para Centroamérica*. San José.

Deere, C. (2008). *The Implementation Game The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, IEG. (2008). *Sostenibilidad ambiental. Evaluación del apoyo ofrecido por el Grupo del Banco Mundial 2008 —Resumen de la evaluación—*. Washington D.C: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.

Institute for Agriculture and Trade Policy. (2008). *Commodities Market Speculation: The Risk to Food Security and Agriculture*. Minnesota.

Organización Mundial del Comercio, OMC. (2008). *Estadísticas del comercio internacional, 2008*. Ginebra.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. (2008). *Perspectivas económicas de América Latina 2009*. París.

Porta, F. (2008). *La integración sudamericana en perspectiva. Problemas y dilemas*. Santiago: CEPAL.

Sercovich, F.C. (2008). *Tratados de libre comercio, derechos de propiedad intelectual y brecha de desarrollo: dimensiones de política desde una perspectiva latinoamericana*. México D.F: CEPAL.

Schuschny, A., Durán, J. & de Miguel, C. (2008). *Política comercial de Chile y los TLC con Asia: evaluación de los efectos de los TLC con Japón y China*. Santiago: CEPAL.

United Nations Conference on Trade and Development. (2008). *Review of Maritime Transport 2008*. Ginebra.

World Bank. (2008). *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. Washington D.C.

World Trade Organization. (2008). *WTO Dispute Settlement: One-Page Case Summaries 2008 Edition*. (1995 - December 2007). Ginebra.